

Editorial elaborado por el equipo del Instituto Progresista-IPV, con base en la información pública disponible hasta el 3 de febrero de 2026 sobre la situación en Venezuela.

EDITORIAL ESPECIAL | UN MES DESPUÉS

Venezuela bajo control: estabilización sin democracia

La comparecencia ante el Senado del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ofreció esta semana una radiografía precisa de cómo Washington interpreta y pretende gestionar el actual escenario venezolano. Rubio fue enfático al situar la política de Estados Unidos no en la promoción inmediata de una transición democrática, sino en una estrategia de estabilización con control estratégico, en la que Washington administra recursos, especialmente los ingresos petroleros, bajo su supervisión, con el objetivo de evitar el colapso del Estado y neutralizar amenazas que percibe en la región.

En su testimonio, defendió la operación que condujo a la captura de Nicolás Maduro como una acción “estratégica” y no como un acto de guerra. Asimismo, describió una relación “productiva y respetuosa” con la presidenta interina Delcy Rodríguez, aunque advirtió que la cooperación sigue siendo condicional y que, en caso de incumplimiento, el uso de la fuerza continúa siendo una opción. Rubio también explicó que los ingresos derivados del petróleo, aún bajo sanciones, están siendo dirigidos a la provisión de servicios básicos bajo supervisión estadounidense, y que la reforma de la Ley de Hidrocarburos constituye un quiebre estructural que difícilmente habría ocurrido sin una presión externa extrema.

Si bien reiteró el objetivo de avanzar hacia elecciones libres y la liberación de presos políticos, su intervención dejó claro que, para Washington, el control precede a la legitimidad y que la estabilidad, la recuperación económica y el orden se imponen como prioridades frente a un avance democrático inmediato.

En este nuevo tablero, María Corina Machado no aparece como una figura operativa del proceso, sino más bien como un activo simbólico. Su rol se vincula al capital moral y al imaginario político, más que a la gestión

efectiva del poder. Para Washington, Machado resulta útil para sostener expectativas sociales y narrativas de futuro, pero no es percibida como una estructura capaz de administrar un Estado en crisis. Movilizar masas no equivale a gobernar, no se gestionan refinerías, no se controlan ministerios ni se administran fuerzas de seguridad sin una estructura institucional funcional.

Durante la audiencia quedó implícito que Estados Unidos no construye su política exterior sobre el entusiasmo popular, sino sobre control territorial, seguridad, energía y capacidad administrativa. En esa ecuación, la plataforma que rodea a Machado no es vista como funcional para manejar orden público, economía, deuda o gobernabilidad básica. Por ello, más que apostar por una oposición civil fragmentada, Washington opta por negociar estabilidad con quienes hoy controlan las armas, los flujos económicos y el territorio.

La lógica de Trump es eminentemente pragmática: el éxito en Venezuela se mide en petróleo fluyendo, deuda reordenada, seguridad contenida y reducción de influencias externas adversas. En ese esquema, un liderazgo sustentado exclusivamente en la popularidad representa un riesgo que Estados Unidos no está dispuesto a asumir.

Paralelamente, comienza a consolidarse una lectura más estructural de lo ocurrido dentro del chavismo. La hipótesis de una fractura interna ha dejado de ser solo un rumor diplomático. Esta semana, el embajador de la Federación Rusa ante las Naciones Unidas, Vasili Nebenzia, afirmó que en Venezuela “sin duda hubo una traición” de altos funcionarios que colaboraron con Estados Unidos y le dieron la espalda a Nicolás Maduro. La declaración refuerza la idea de que la caída de Maduro no puede explicarse únicamente por la presión externa, sino por quiebres internos dentro del aparato de poder.

Que Moscú formule esta tesis de manera abierta introduce un elemento analítico clave: el problema no fue sólo la intervención internacional, sino la erosión de lealtades, incentivos y pactos que sostenían el sistema. Más que una derrota externa, lo que se evidencia es una crisis de cohesión interna, donde la supervivencia individual comenzó a pesar más que la disciplina del proyecto político.

Presos políticos y amnistía como gestión del conflicto

En un acto celebrado en el Tribunal Supremo de Justicia, Delcy Rodríguez anunció una amnistía general que será remitida a la Asamblea Nacional bajo el argumento de promover la convivencia y la paz social. Aunque el anuncio tiene una carga simbólica relevante, su alcance real aún está por definirse. Hasta ahora, las excarcelaciones han operado más como instrumentos políticos que como una política humanitaria: han sido selectivas, dosificadas y condicionadas por equilibrios internos del poder.

Desde el Instituto Progresista sostenemos una posición clara frente a la llamada Ley de Amnistía. No se trata de una concesión generosa ni del resultado de una apertura democrática espontánea. La amnistía ha sido una exigencia histórica de la oposición venezolana durante más de dos décadas, sistemáticamente vetada por el régimen y, en muchos casos, acompañada de campañas de estigmatización pública. Si hoy aparece en la agenda oficial, no es por convicción, sino por presión política, social e internacional acumulada.

Una ley de este tipo solo tiene sentido si se aplica de manera íntegra a los más de 700 civiles, activistas sociales, dirigentes políticos, dirigentes sindicales, policías y militares que aún continúan injustamente encarcelados mediante expedientes fabricados y acusaciones falaces. Sumando en esta propuesta legislativa a todos los excarcelados recientemente con causas judiciales abiertas, así como a los centenares de víctimas de desapariciones forzadas (detenidos arbitrariamente sin dar a conocer el paradero del centro de reclusión o conocerse algún procedimiento judicial). A todos estos casos debe acoger la ley.

Asimismo, la amnistía debe contemplar mecanismos de reparación. Nada puede borrar el daño sufrido por las víctimas y sus familias, pero el Estado tiene la obligación política y moral de avanzar en esquemas de reconocimiento e indemnización. Espacios como El Helicoide no pueden convertirse en lugares de esparcimiento: deben preservarse como memoriales del terror, como testimonio de una época de arbitrariedad ejercida para aferrarse al poder. La memoria no es venganza; es prevención.

La ley expresada en los términos anteriores, además del desmontaje del aparato represivo y el cese de la persecución política, permitiría construir

el camino de la reconciliación nacional. No basta con liberar a los presos políticos de hoy con el temor de que mañana sean otras las víctimas.

El espíritu de una amnistía real reposa en la búsqueda de la justicia, libera a las víctimas , no a los victimarios. Si la ley sirve de escudo a los responsables de los crímenes de lesa humanidad, más que un paso hacia la reconciliación sería un intento de reescribir la impunidad con lenguaje legal.

Recomposición controlada del vínculo bilateral

En la última semana, se produjeron avances significativos en el sector petrolero y en la conectividad internacional, que reflejan cómo la economía política del país continúa reconfigurándose bajo presión. La Asamblea Nacional aprobó una reforma profunda de la Ley de Hidrocarburos orientada a revertir décadas de monopolio estatal y abrir la puerta a una mayor participación privada y extranjera en la industria petrolera.

Bajo el nuevo marco legal, las empresas privadas podrán asumir un rol más amplio en la extracción, producción, comercialización y exportación de crudo, además de acceder a incentivos fiscales ampliados y a mecanismos de arbitraje internacional independientes. No obstante, persisten ambigüedades jurídicas, y diversos analistas advierten que el texto legal, por sí solo, no garantiza la seguridad jurídica que requieren las grandes inversiones.

De forma complementaria, la administración Trump suavizó sanciones claves sobre la industria petrolera venezolana mediante licencias generales que permiten a empresas estadounidenses operar con crudo venezolano bajo esquemas de supervisión. El objetivo es integrar a compañías norteamericanas en el comercio energético y asegurar que los flujos estratégicos de recursos se destinen a partidas esenciales del presupuesto bajo control estadounidense.

En el plano bilateral, Estados Unidos anunció la reapertura del espacio aéreo comercial y la reanudación de vuelos directos entre ambos países por primera vez en casi siete años. American Airlines expresó su disposición a restablecer rutas una vez cumplidos los requisitos técnicos y de seguridad, enviando una señal clara de recomposición gradual del vínculo bilateral.

Finalmente, otro elemento clave fue la llegada de Laura Dogu como Encargada de Negocios de Estados Unidos para Venezuela, sin rango de embajadora. Su designación —que no requirió *pláctet*— no implica reconocimiento formal del gobierno interino de Delcy Rodríguez, pero sí marca la primera reinstalación de una misión diplomática estadounidense en siete años. Dogu arribó bajo el título de *chargé d'affaires* de la Unidad de Asuntos para Venezuela, con el mandato de abrir canales de comunicación directa y avanzar en una hoja de ruta centrada en estabilidad y recuperación económica.

Casi en simultaneo, se nombró a Félix Plasencia como representante diplomático de Venezuela ante Estados Unidos. Plasencia, considerado cercano a Delcy Rodríguez, ya habría viajado a Washington a mediados de enero para sostener contactos vinculados a la relación bilateral. Su trayectoria incluye cargos como viceministro, ministro de Relaciones Exteriores (2021–2022) y embajador en China, Colombia y Reino Unido; donde se desempeñó como embajador hasta ser nombrado en esta nueva responsabilidad en los Estados Unidos.

Transición a la venezolana

Las palabras *negociación* y *diálogo* arrastran, lamentablemente, una connotación negativa en el imaginario colectivo venezolano. Sin embargo, ambas son herramientas imprescindibles en la política, en cualquier país, nivel o circunstancia, y resultan fundamentales en cualquier proceso de transición.

Hoy, más allá de calificar los acontecimientos como buenos o malos, correctos o incorrectos, los hechos ocurridos a partir del 3 de enero dejaron a la oposición venezolana, en su conjunto, mal posicionada frente al colapso político generado tras la extracción de Nicolás Maduro y Cilia Flores. No existen recetas únicas ni manuales prediseñados para una transición. Los venezolanos podrán —y deberán— construir su propia vía, pero resulta indispensable un proceso que permita recomponer, desde las diferencias, a la oposición democrática, de modo que actúe de forma articulada como una presión positiva sobre el sistema para generar cambios reales. A ese esfuerzo apuntan llamados como los realizados por líderes de la oposición parlamentaria, quienes han insistido en la necesidad de un diálogo interno en la oposición.

Actualmente, en el seno de la Asamblea Nacional, donde se plantea discutir la reinstitucionalización del país, apenas existen once voces

disidentes dentro de un Parlamento ampliamente controlado por el chavismo. Aun así, a través de esa estrecha rendija comienzan a reactivarse partidos y liderazgos políticos en el territorio, con el objetivo de reconstruir, desde las cenizas, lo que dejó la represión política.

Por su parte, la oposición encabezada por María Corina Machado, en su estrategia de persuasión ante Donald Trump, ha asegurado que estaría dispuesta a reunirse con Delcy Rodríguez para discutir un “cronograma” de transición democrática, proceso que volvió a calificar como “irreversible”, esto en la última fase contempla un proceso electoral presidencial con garantías universales, directas y secretas. Seguidamente, la exigencia de Machado y la Plataforma Unitaria (coalición de partidos de oposición vencedores en la contienda electoral presidencial del 28 de julio de 2024) contrasta con la acción del Consejo Nacional Electoral, en la que se suspendió temporalmente el proceso de registro de nuevos partidos políticos, afectando el pluralismo y el paisaje institucional de cara a las próximas etapas del país.

La transición no se definirá por épicas ni victorias morales, sino por la capacidad real de articular fuerzas, reconstruir confianzas y asumir la complejidad del momento histórico. El poder hoy se disputa en el terreno de la operatividad, la institucionalidad y la presión estratégica. Quien no lo entienda corre el riesgo de quedar atrapado en el discurso mientras otros ya están decidiendo el rumbo del país.

Desde el Instituto Progresista reafirmamos nuestro compromiso con el análisis riguroso, independiente y responsable de la coyuntura venezolana. En contextos de alta complejidad y transformación acelerada, comprender los procesos en curso resulta tan relevante como participar activamente en su discusión pública.

El Instituto Progresista depende del apoyo de personas comprometidas con el análisis independiente y la construcción democrática. Si este trabajo te resulta valioso, te invitamos a contribuir con una donación para que podamos seguir investigando, publicando y generando propuestas para el país. Tu aporte es clave para sostener este esfuerzo.